Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

Constancia: mayo 14 de 2025.- En la fecha correspondió por reparto el presente proceso declarativo remitido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán para surtir recurso de apelación formulado de manera subsidiaria al de reposición.-

Carolina Valverde Concha
Secretaria

Juzgado Cuarto Civil del Circuito

Popayán, diecinueve de mayo de dos mil veinticinco

Auto n.º 676

I. Asunto

Se decide el recurso de apelación interpuesto por HDI Seguros Colombia S.A., contra el auto n.º 3.104 de cuatro de octubre de 2.024, proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán.

II. Antecedentes

Humberto Quiroga Serna, Alba Leonor Dávalos, Zoila Blanca Matabanchoy Pérez, Fredy Fernando Medina Monje y Carlos Augusto Quiroga Bustos presentaron demanda contra Javier Andrés Cabrera Suárez, Mary Elizabeth Astaiza Samboní y HDI Seguros S.A. -hoy HDI Seguros Colombia S.A.-, en orden a que se declare su responsabilidad civil extracontractual con ocasión de los hechos ocurridos el 19 de enero de 2.019 en la carrera 9 con calle 25 de esta ciudad, condenándoles a pagar los menoscabos causados a título de daño emergente, lucro cesante y perjuicio moral [páginas 1-45, archivo electrónico 002, carpeta de primera instancia].

Al efecto se arrimaron múltiples documentos con los que procuraron respaldar sus aserciones, según se detalló en el libelo genitor, entre todo lo cual, para lo que acá interesa, enlistaron los siguientes [pgs. 41-42, *ídem*]:

- Cotización de Auto Pacifico con el objeto de acreditar el valor por concepto de arreglo del vehículo de Placa RGZ 712
- Contrato de transporte. Suscrito el 01 de febrero de 2019, entre el señor Carlos Augusto Quiroga Bustos en calidad de contratante y Jorge Estiven Orozco Álvarez en calidad de transportador
- Renuncia a contrato de transporte del señor Carlos Augusto Quiroga Bustos en calidad de contratante y el señor Jorge Estiven Orozco Álvarez en calidad de transportador firmado el 31 de diciembre de 2019.

En su contestación de la demanda, HDI Seguros Colombia S.A. incluyó un acápite que denominó «*medios de prueba solicitados y aportados*», en cuyo

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

literal E. insertó el título de «*ratificación de documentos provenientes de terceros*», mismo que fundó en el artículo 262 del C. G. del P., el cual pidió aplicar, entre otras tantas más, a las siguientes piezas [página 62, archivo electrónico 011, carpeta *ídem*]:

- Contrato de transporte suscrito el 01 de febrero del 2019, entre el señor Carlos Augusto Quiroga Bustos y Jorge Estiven Orozco Álvarez.
- Renuncia contrato de transporte suscrito el 01 de febrero del 2019, entre el señor Carlos Augusto Quiroga Bustos y Jorge Estiven Orozco Álvarez.
- Cotización de Auto Pacífico con el objeto de acreditar e valor por concepto de arreglo del vehículo de placa RGZ 712.

III. El auto apelado

Aunando la decisión con sus fundamentos, resolvió en los párrafos cuarto y quinto del literal «a-» del numeral «3.- *pruebas de la parte demandada: HDI Seguros S.A.*» del ordinal «*tercero*» [archivo 016, *ídem*]:

TERCERO: Decretar las siguientes pruebas de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 372 y el numeral 3 del artículo 373 del C.G.P.

(...)

3.- PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA: HDI SEGUROS S.A

a- DOCUMENTAL:

(...)

Con relación a la solicitud de ratificación del contrato de transporte suscrito el 01 de febrero de 2019, entre los señores CARLOS AUGUSTO QUIROGA BUSTOS y JORGE ESTIVEN OROZCO ÁLVAREZ, así como la renuncia del contrato en mención, se NIEGAN por improcedentes, toda vez que los citados documentos tienen carácter dispositivo y provienen de una de las partes (demandante), lo que contradice lo dispuesto en el artículo 262 del C.G.P., que menciona que se puede solicitar la ratificación de documentos privados declarativos, provenientes de terceros.

Finalmente, se NIEGA la ratificación del documento contentivo de la cotización efectuada por AUTO PACÍFICO sobre el vehículo de placas RGZ 712, debido a que no se trata de un documento declarativo ni útil para resolver el litigio.

IV. El recurso de apelación

Aseguró que la cotización de Auto Pacífico es vital para demostrar el costo real de los daños y el valor del arreglo del vehículo de placas de placas RGZ 712, de ahí que sin su ratificación sería imposible corroborar su autenticidad y veracidad, incidiendo en la adecuada resolución del litigio, de prosperar la indemnización, puesto que alude a los costos en el mercado automotriz de los repuestos y mano de obra necesarios para la reparación del rodante, de donde su ratificación permitiría dimensionar si su valor es objetivo y está en sintonía con la realidad comercial, máxime que se trata de un

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

documento declarativo, «*ya que en su contenido se detallan, los supuestos los costos y trabajos necesarios para la reparación del vehículo*», sumado a que tal información emana de un tercero.

Añadió que tanto el contrato de transporte suscrito el 1° de febrero de 2.019 entre los señores Carlos Augusto Quiroga Bustos y Jorge Estiven Orozco Álvarez, como la renuncia, tienen elementos declarativos, en tanto describen hechos y acuerdos relacionados con el servicio de transporte asociado a la reclamación económica del extremo demandante, ameritando su ratificación en aspectos tales como montos, fechas y términos para garantizar que no se trata de una afirmación unilateral no corroborada, y ejercer así el legítimo derecho de contradicción que le asiste a la demandada, salvando que si bien uno de sus suscriptores es parte en este asunto, el otro no lo es -Orozco Álvarez-, refiriendo la pieza procesal a la prestación efectiva del servicio de transporte, aspecto nodal en la controversia que requiere ser constatada por la senda invocada [archivo 018, *ídem*].

V. Trámite

Sin perjuicio del envío de la anterior intervención a los correos de los demás litigantes, el 15 de octubre de 2.024 el Juzgado fijó en lista la censura en comentario [archivo 020, *ídem*], sin que se presentara réplica alguna.

En providencia n.º 1.385 de 30 de abril de 2.025 se desestimó el ataque horizontal y se concedió, en el efecto devolutivo, la alzada invocada en subsidio [archivos 022-023, *ídem*].

El 14 del cursante mes se recibió el expediente por este Estrado [archivo 001, cuaderno de segunda instancia].

VI. Consideraciones

1. La competencia del Despacho para decidir el recurso de apelación se radica por obra de los artículos 33.1 del Código General del Proceso y 22 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, al ser el superior funcional del Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán - Cauca, el cual dictó en primera instancia la decisión apelada.

2. Era procedente conceder el recurso de apelación, y lo es resolverlo ahora, toda vez que: se instauró y sustentó a tiempo por la parte desfavorecida, es decir, la legitimada, a través de su vocero judicial, en el marco de un proceso de menor cuantía, conocido por el Estrado *A quo* en primera instancia;

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

enfilándose el descontento contra una providencia susceptible de medio de impugnación que se dirime, según el numeral 3 del artículo 321 del C. G. del P.

3. Salvado lo precedente, se pregunta el Juzgado, a título de problema jurídico, si debe revocarse los apartados cuarto y quinto del literal a del numeral 3 del ordinal tercero del auto n.º 3.104 de cuatro de octubre de 2.024, dictado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán, en cuanto negó la solicitud de ratificación de la cotización de Auto Pacífico S.A., del contrato de transporte suscrito el 1º de febrero de 2.019 entre Carlos Augusto Quiroga Bustos y Jorge Estiven Orozco Álvarez, y de la terminación unilateral que del mismo se comunicó.

4. La tesis del Despacho, en respuesta, es que no hay fundamento para enervar tales determinaciones. Los motivos pasan a elucidarse:

5. A voces del artículo 243 del C. G. del P. son documentos¹ «*los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares*»; subdividiéndose en públicos -si fuere otorgado por un funcionario público o un particular con funciones públicas, en ejercicio de sus competencias o con su intervención- y privados.

5.1 Por su parte, el canon 244 del estatuto procesal consagra la noción de autenticidad, expresando que la misma se colmará de haber «*certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento*», presumiéndose la misma, en caso de los «*documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen...mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso*».

5.2 Siendo que: (i) toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, según así lo anticipa el artículo 164 del C. G. del P., y, (ii) las personas tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses [art. 2º *ídem*]; cardinal valía es la que tiene la noción de contradicción de las pruebas

¹ «Para que un escrito pueda ser calificado como “documento” debe tenerse en cuenta que tal condición sólo se atribuye a las manifestaciones consignadas de manera espontánea y libre, con carácter informativo o expositivo, haciendo constar situaciones concretas pero sin intereses probatorios, toda vez que cuando rebasan tal límite derivan en otros medios de convicción como lo es la pericia, la inspección, la declaración o la rendición de informes técnicos, los cuales, una vez practicados dentro de actuaciones judiciales o administrativas, quedan materializados, sin que pueda haber lugar a confusión en relación con su naturaleza». CSJ SC, 19 dic. 2011, rad. 1100102030002009-00919-00. Evocada en sentencia CSJ SC22055-2017.

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

[v.gr. art. 171 *ídem*], como derecho en concreto a controvertir o contraprobar lo que la parte contraria pretende instruir.

5.3 Al respecto, la Corte Constitucional ha enseñado:

«15.2. En un sentido más general, la Sala Plena ha indicado que el debido proceso probatorio supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en el marco de toda actuación judicial o administrativa². De este modo, ha afirmado que estas tienen derecho (i) a presentar y solicitar pruebas; (ii) a controvertir las que se presenten en su contra; (iii) a la publicidad de las evidencias, en la medida en que de esta forma se asegura la posibilidad de contradecirlas, bien sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros elementos; (iv) a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su nulidad; (v) a que el funcionario que conduce la actuación decreta y practique de oficio los elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 C.P.); y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.

La posibilidad de presentar, solicitar y controvertir pruebas, como se indicó, es una consecuencia directa del derecho de defensa. A las partes les asiste la potestad de presentar argumentos jurídicos y razones en procura de sus intereses, de censurar el mérito de los elementos de convicción presentes en el expediente, pero también de respaldar su punto de vista con apoyo en evidencias propias...»³.

5.4 Por lo tanto, el artículo 262 del C. G. del P. norma que los *«documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación»*.

5.5 Empero, la vista no es la única forma de refutar instrumentos provenientes de terceros. Apenas lo es para aquellos de contenido declarativo, porque de serlo con alcance dispositivo o representativo, la manera de repelerlos es el desconocimiento con margen de libertad probatoria, como así está reglado en el artículo 272 *ibidem*, al señalar que *«[e]n la oportunidad para*

²-Cita del texto original- Se trata de una posición planteada en la Sentencia C-1270 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell, y reiterada posteriormente, por ejemplo, en las sentencias C-1104 de 2001. Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1099 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-868 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. La Corte ha señalado que se trata de contenidos del debido proceso que, en materia probatoria, restringen la potestad de configuración normativa del Legislador.

³ Corte Constitucional, sentencia C-163 de 2019.

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

formular la tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros. No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requisitos indicados en el inciso anterior. // De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá solicitar que se verifique la autenticidad del documento en la forma establecida para la tacha»⁴.

5.6 Las alusiones precedentes imponen recordar la distinción entre documentos dispositivos, declarativos y representativos.

5.7 De antaño se ha mencionado que *«sabido es que los documentos son simplemente representativos cuando, sin plasmar narraciones o declaraciones de cualquier índole, contienen imágenes, tal como acontece con las fotografías, pinturas, dibujos, etc. Y son declarativos, cuando contienen una declaración de hombre y en tal caso se les suele clasificar en dispositivos y testimoniales, según correspondan a una declaración constitutiva o de carácter negocial (los primeros), o a una de carácter testimonial (los segundos)»* (CCXXII, pág. 560)⁵.

5.8 La doctrina, a su turno, identifica el documento declarativo en *«aquel que, además de ser creado por la persona humana, tiene como fin realizar una manifestación que busque una consecuencia frente a terceros, sin que ello implique necesariamente la creación de una obligación»⁶*, desagregados entre los que son *«de simple ciencia, como los testimonios y las confesiones»⁷*, de aquellos que corresponden al carácter *«dispositivo, como un pagaré, un contrato, una propuesta de negocios (oferta), etc...»⁸*.

5.9 Merced a lo indicado, el documento declarativo, *«hace constar hechos sucedidos y constatados por él que no implican actos dispositivos de voluntad encaminados a producir un determinado efecto jurídico. En esa*

⁴ «4.3.2. Cosa distinta es la certeza del contenido del documento. El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, con las reformas introducidas por las Leyes 1395 de 2010 y 794 de 2003, la identifican con su veracidad o autenticidad, en cuanto se refiere a la certidumbre de la «persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado».

(...)

En el ámbito del Código General del Proceso, la valoración de los «documentos declarativos», en original o en copia, sigue la misma regla antes explicada (artículo 262⁴). No obstante, la situación es distinta cuando se trata de instrumentos «dispositivos o representativos» (artículo 272-1). Como la normatividad presume la certeza, su valoración procede cuando no es desconocida. En el caso de rechazarse, la apreciación requiere verificar su contenido mediante una articulación (inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria» (inciso 5º, ejúsdem)». CSJ SC4792-2020.

⁵ CSJ SC, 18 mar. 2002, rad. 6649.

⁶ Nisimblat, N.: «Código General del Proceso. Derecho Probatorio», Ed. Doctrina y Ley, pp 365. Mencionado por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto de tres de marzo de 2.023, rad. 11001-31-99-002-2022-00092-02.

⁷ Ib.

⁸ Ib.

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

medida tiene un significado testimonial, cuyo valor probatorio deviene precisamente de que su contenido haya cumplido la exigencia de la ratificación mediante las formalidades de la prueba de testigos, a fin de que sea apreciado en la misma forma que los testimonios, cual lo establece el numeral 2o. del artículo 277, del C. de P.C. [hoy 262 del C. G. del P.]»⁹.

6. Al abrigo de las anteriores precisiones se desatará en breve la apelación, señalando:

7. De la cotización n.º 38,899 de Autopacífico S.A., visible en las páginas 271 a 273 del archivo electrónico 002 de la carpeta de primera instancia, comparte este Estrado lo que se asentó en el auto atacado: no se trata de un documento declarativo.

7.1 A la clase de documental estudiada, esto es, a una cotización, se le ha reconocido el propósito de «*dar a conocer una oferta*»¹⁰, por lo que no se limita a informar o declarar, sino a contener, como en efecto contiene una propuesta de negocio, lo que le erige en documento dispositivo.

7.2 En tal sentido, se mantendrá la negativa de la ratificación que de ella se instó, al no encajar su tipología en lo previsto en el artículo 262 del C. G. del P., aclarando que lo anunciado no implica secundar la expresión contenida en el auto 1.385 de 30 de abril último, cuando el *A quo* aseveró que «*[e]ste documento por sí solo no es idóneo para reconocer un hecho económico, ya que no genera ninguna obligación o derecho para las partes, así como tampoco es idóneo para soportar una obligación entre las partes*», en tanto lo así vertido corresponde a una inoportuna calificación del valor o mérito de la evidencia, para lo cual no es idónea la decisión acerca de su decreto, sino la sentencia misma.

7.3 Con la salvedad que antecede, se validará la negativa del trámite de ratificación de la cotización estudiada.

8. En punto al contrato de transporte celebrado entre Carlos Augusto Quiroga Bustos y Jorge Estiven Orozco Álvarez [páginas 279 a 281, a.e. 002], si bien es un documento que mana de un tercero, al menos en lo que respecta al último sujeto mencionado, en todo caso carece del carácter declarativo que justifica la ratificación clamada, si en cuenta se tiene que contiene «*actos de voluntad por los cuales se disponen, contraen, generan o extinguen obligaciones*»¹¹, mismas

⁹ CSJ SC, 15 sep. 1995, rad. 4271, retomado en la sentencia CSJ SC, 7 mar. 2012, rad. 1100131030032007-00461-01.

¹⁰ CSJ SC, 14 oct. 2010, rad. 41298-3103-002-2002-00024-01.

¹¹ CSJ SC11822-2015.

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

que para el caso indican la asunción de una obligación de transportar, a cambio de una remuneración o contraprestación pecuniaria.

8.1 Lo confirma el tenor literal de sus dos primeras cláusulas, a saber:

Entre los suscritos, **CARLOS AUGUSTO QUIROGA BUSTOS**, con domicilio en la Calle 70 N, N° 5ª-42, Barrio la Paz, Piso 1, jurisdicción del Municipio de Popayan Cauca, identificado con la cédula de ciudadanía 76.330.344 de Popayán-Cauca, quien en adelante se denominara el **CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra, parte, **JORGE ESTIVEN OROZCO ALVAREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 18.494.432 expedida en Armenia, domiciliado en la Transversal 33 N° 11C-12 Barrio 31 de marzo Popayán, quien en adelante se denominará **EL TRANSPORTADOR**, se ha celebrado el presente contrato de transporte, que se registrá por las normas de derecho privado que rigen la materia , y por las siguientes cláusulas: **PRIMERA**. Objeto: Lo constituye la obligación por parte **DEL TRANSPORTADOR** a favor del señor **CARLOS AUGUSTO QUIROGA BUSTOS**, de transportarlo junto a su hija, dentro de la ciudad de Popayán, en el vehículo de servicio Público, de Placa SHS 690, de acuerdo a las instrucciones previamente impartidas por el contratante, a cambio del pago mensual del servicio de transporte. El objeto mencionado comprende, entre otras, las siguientes actividades **(1)** Transportar al señor **CARLOS AUGUSTO QUIROGA BUSTOS**, desde su lugar de habitación ubicado en la Calle 70 N, N° 5ª-42, Barrio la Paz, jurisdicción del Municipio de Popayan Cauca hasta el colegio nuestra señora del Carmen lugar donde estudia su hija menor y de ahí hasta su lugar de trabajo ubicado en la galería del barrio bello horizonte y viceversa de lunes a viernes en horario de 6:00 AM a 16:00 PM, **SEGUNDA**. Valor: El valor del presente contrato se fija en la suma de **TRECIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 350.000.00) PESOS M/CTE mes a mes**, Que se pagará al **TRANSPORTADOR**, en forma porcentual, según las actividades ejecutadas, En caso de no ejecutarse en su totalidad el presente contrato desde su firma, el valor se reajustará para el próximo año, con base en el Índice de Precios al Consumidor I.P.C, según la certificación que expida el DANE, para el año inmediatamente anterior; caso en el cual el contrato vencerá una vez agotada la respectiva reserva. **TERCERA**. Plazo: El término de duración del presente contrato finalizará una vez el

8.2 La pieza en comento, dado su perfil dispositivo, no coincide con la eventualidad normada en el precepto 262 del C. G. del P., siendo correcta la desestimación del trámite ahí contemplado.

9. Por último, al revisarse la terminación unilateral del contrato de transporte que se aprecia en el folio 282 del archivo 002 del paginario de primera instancia, brota patente la inviabilidad de su ratificación, porque como reiteradamente se ha evocado, ella es atendible para documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros¹², mientras que el finiquito negocial en cuestión, por antonomasia, se enfiló a extinguir un débito negocial,

¹² «...es parte, en sentido procesal, el titular, por activa o por pasiva, de la pretensión procesal, esto es, toda persona que efectivamente llega al proceso como pretensionante o resistente. Al paso que es parte, en sentido sustancial, el titular de la relación sustancial que se debate como litigio, siendo posible que confluyan en el mismo sustrato personae, ambas cualidades, de parte en sentido procesal y parte en sentido sustancial, o que se disagreguen esas titularidades en personas diversas.

A la inversa, todo el que no ha llegado al proceso como parte, en sentido procesal, es tercero, aun cuando tenga la calidad de parte en sentido sustancial». Quintero Beatriz y Prieto Eugenio. "Teoría General del Derecho Procesal", Editorial Temis, 2008, pg. 495.

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

mostrando su raigambre dispositivo, sumado a que se suscribió por el señor Carlos Augusto Quiroga Bustos, quien es parte demandante¹³, lo cual hace que su misiva esté excluida de las cobijadas por la regla 262 del C. G. del P.

10. En suma, como la providencia revisada se ajusta al estándar de la legalidad aplicable, se confirmará, sin imponer condena en costas, al no haberse causado [art. 365.8 C. G. del P.].

VII. Decisión

En razón y mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán,

Resuelve:

Primero.- CONFIRMAR el auto n.º 3.104 de cuatro de octubre de 2.024, proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán, en lo que fue materia de apelación.

Segundo.- NO IMPONER condena en costas.

Tercero.- ORDENAR que por Secretaría de este Juzgado se emita la comunicación de que trata el inciso segundo del artículo 326 del C. G. del P.

Cuarto.- ORDENAR que, en firme esta decisión, se envíe lo actuado en segunda instancia al Juzgado de origen, anotando la salida y archivando lo actuado, previas las constancias a que haya lugar.

Notifíquese y cúmplase.

Firmado Por:

Gustavo Andres Valencia Bonilla

Juez
Juzgado De Circuito
Civil 004
Popayan - Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **002e240ef47b939b90cf4d14e7fb5751b0d2a474a3b7bc5c80dfc737665d679**

Documento generado en 19/05/2025 11:50:41 AM

¹³ Precisa la más autorizada doctrina que «el concepto de parte derivase del concepto de proceso y de la relación procesal; es parte el que demanda en nombre propio (o en cuyo nombre es demandada) una actuación de la ley, y aquel frente al cual ésta es demandada. La idea de parte nos la da, por lo tanto, el mismo pleito, la relación procesal, la demanda, no es preciso buscarla fuera del pleito y en particular de la relación sustancial que es objeto de la contienda». Fuente: Chioyenda José, *Derecho Procesal Civil*, t, II, Madrid, Ed. Reus, 1922, pág. 6.

Proceso: Verbal
Demandantes: Humberto Quiroga Serna y otros
Demandados: Javier Andrés Cabrera Suárez y otros
Providencia: Resuelve recurso de apelación

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>